

ILMA. SRA.:

Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación para la Redacción de proyectos de obras e instalaciones, estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y control de calidad, así como de la dirección de obra e instalaciones, dirección de la ejecución material de la obra, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, seguimiento de control de calidad de la obra: "Adecuación y mejoras del CEIP Castillo del Real de Marines publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público del pasado 7 de diciembre de 2023 (Expte. 611/2023), y dentro del plazo legal que se concede en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público, formulamos el presente **RECURSO DE REPOSICIÓN** en base a los siguientes

FUNDAMENTOS

PRIMERO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL CTAV.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, que dispone: *"Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso"*.

El artículo 24 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, establece en su párrafo primero: *"Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con el objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados"*.

La entidad recurrente es una Corporación de Derecho Público representativa de los intereses profesionales de los colegiados, de acuerdo con sus Estatutos, por lo que persigue la defensa de los intereses de sus fines colegiales, siendo claro que su objeto está relacionado directamente con el del objeto del contrato.

En este sentido, citar la reciente Resolución de este Tribunal, Resolución 351/2017, de 21 de abril en la que se pone de manifiesto: "A este respecto, y citando, por todas, la Resolución 654/2015, de 10 de julio, cabe señalar lo siguiente: 'Ya en la Resolución 232/2012, de 24 de octubre, el Tribunal reconoció a las Corporaciones de Derecho Público (en aquél caso concreto, a un Colegio Profesional), 'legitimación para recurrir las disposiciones generales y actos que afectan a intereses profesionales, siempre y cuando tengan carácter de afectados, en el sentido de que su ejercicio profesional resulte afectado por el acto impugnado (SSTS, entre otras, de 24 de febrero de 2000 [RJ 2000, 2888], 22 de mayo de 2000 [RJ 2000, 6275], 31 de enero de 2001 [RJ 2001, 1083], 12 de marzo de 2001 [RJ 2001, 1712] y 12 de febrero de 2002 [RJ 2002, 3160])'. Y, como se indicó en la más reciente Resolución 465/2015, de 22 de mayo, '... la jurisprudencia y también la doctrina de este Tribunal ha reconocido la legitimación de los Colegios Profesionales para impugnar aquellas disposiciones o actos de naturaleza contractual que pudieran afectar a sus intereses profesionales, si bien precisando que tan amplia legitimación no puede suponer en ningún caso el reconocimiento de una suerte de acción popular que habilite a las Corporaciones de Derecho Público para intervenir en cualquiera cuestiones sin más interés que el meramente abstracto de defensa de la legalidad supuestamente violada. Lo cual se ha traducido en la práctica en el reconocimiento de su legitimación activa para impugnar los Pliegos en defensa de los intereses profesionales de sus afiliados.'"

Y la última Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 13 de mayo de 2023, núm. 580/2023, dispone en su Fundamento de Derecho Cuarto lo siguiente:

"Cuarto. Según el artículo 48 LCSP, la legitimación para interponer este recurso alcanza a 'cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso'".

Sobre la legitimación de las corporaciones de derecho público y, en particular, de los colegios profesionales, es doctrina de este Tribunal la contenida, entre otras, en Resoluciones como la 155/2022, de 3 de febrero en la que, con cita de resoluciones anteriores y de jurisprudencia del Tribunal Supremo, la hemos admitido 'siempre y cuando tengan carácter de afectados, en el sentido de que su ejercicio profesional resulte afectado por el acto impugnado (...) Lo cual se ha traducido en la práctica en el reconocimiento de su legitimación activa para impugnar los Pliegos en defensa de los intereses profesionales de sus afiliados' de modo que: 'la clave para apreciar la legitimación de este tipo de sujetos de derecho público está en que el recurso redunde en beneficio de los intereses profesionales que le son propios'.

En el caso que nos ocupa es claro que las censuras efectuadas al pliego, inciden sobre las condiciones de acceso de los arquitectos a la licitación, por lo que es forzoso reconocer dicha legitimación. Por otro lado, ésta no es discutida por el órgano de contratación."

Pues bien, figurando entre los fines de esta Corporación la defensa de los intereses profesionales de sus miembros, ha de entenderse, conforme a la doctrina citada, que ostentan legitimación cuando aquello que impugnan incide directamente en los intereses profesionales de sus representados, pero no cuando persiguen la impugnación del contrato licitado por meras razones de legalidad.

SEGUNDO. - RECURRIMOS EL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, EN LAS CONDICIONES DE LA SOLVENCIA TÉCNICA, EN LA QUE NO SE INCLUYE A LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, COMO ESTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90.4 DE LA LEY DE CONTRATOS. (cláusula octava de los PCAC,)

El pliego de condiciones administrativas particulares, para este contrato, solamente señala criterios de experiencia como solvencia técnica, para poder acceder a la participación en este concurso, cuando nos encontramos ante un contrato NO SARA, y de acuerdo con el artículo 90.4 de la Ley de Contratos del sector Público, para las empresas de nueva creación los criterios de admisión y participación en los contratos de servicios, serán otros que no se han incluido en las bases de este. Con lo que se quedarían fuera sin posibilidad de participar en este.

A juicio de este Colegio, el presente concurso, no tiene en cuenta a las empresas de nueva creación para que puedan poder participar en el mismo, lo que supone un trato desigual del resto, que sí tienen experiencia, y en contra de lo previsto en el artículo 90.4 de la Ley de Contratos del sector público, así como un impedimento a la libre competencia y el principio de igualdad, al no permitir que estos profesionales y empresas de nueva creación, (tratándose de un contrato no SARA).

El art. **90.4 de la LCSP dice:** *"En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiéndose por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de servicios"*

No incluir esta cláusula, que por otro lado es obligatorio en este tipo de contrato, supone una vulneración del principio de concurrencia, vinculado al de igualdad y no discriminación (artículo 1º de la LCSP) puesto que, a través de estos, se garantiza que participen de los procedimientos de licitación el mayor número posible de licitadores en igualdad de condiciones, y sin dejar fuera a los que no tienen aún esa experiencia.

Y el artículo 1 de la LCSP establece:

"Objeto y finalidad.

*1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y **no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores**; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa."*

Y sobre esta cuestión, **la resolución número 1416/2021 del Tribunal administrativo central de recursos contractuales de 22 de diciembre de 2021, interpuesto por el colegio oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana**, en el que el fallo textualmente dice:

*Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. Luis Miguel Sendra Mengual, en representación del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COACV), contra los pliegos de la licitación convocada por la Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para contratar los "Trabajos de consultoría y asistencia técnica consistentes en la redacción del proyecto constructivo y dirección de obra de adecuación de las rejillas de ventilación en Metrovalencia para la disminución de ruido", expediente 21/044, **que se anulan por no incorporar los criterios de solvencia alternativos exigidos por el artículo 90.4 de la LCSP, con retroacción de actuaciones al momento anterior a la aprobación del PCAP**"*

Y más recientemente en el **Recurso nº 299/2022 C Valenciana 83/2022 Resolución nº 415/2022 Sección 2ª RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES En Madrid a 31 de marzo de 2022**, dictado en el mismo sentido.

TERCERO.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PROYECTOS O DIRECCIONES FACULTATIVAS REALIZADAS CON EL PLAN EDIFICANT DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, ES UNA CLAUSLA DISCRIMINATORIA Y RESTRICTIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA, IGUALDAD... EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. con relación a la cláusula undécima de PPT)

En concreto la cláusula decimoprimera del PPT dice: "*1. Experiencia en obras. 35 puntos La valoración se basará en la experiencia acreditada en obras realizadas dentro del Plan Edificant, obras realizadas para la administración y otras obras realizadas en el ámbito de la edificación docente*".

El plan Edificant es el resultado de un convenio entre la Conselleria y los Ayuntamientos para colaborar en la construcción, reforma de centros educativos de la Comunidad valenciana.

Además de que no solo la Conselleria de educación puede sacar a concurso un colegio, como lo acredita esta misma licitación, al hacerlo directamente el Ayuntamiento, luego valorar con más puntos los que hayan trabajado para una determinada Conselleria, es absolutamente discriminatorio.

Esta cláusula es discriminatoria, al valorar más a empresas que hayan desarrollado un servicio con el Plan Edificant la Conselleria de educación de la Comunidad Valenciana, restringiendo limitando la puntuación a quienes no obtuvieron las licitaciones con el Plan Edificant. Sin que esta característica sea un concepto que valora la calidad del servicio de arquitectura o componga el plan de estudio de la carrera de arquitecto. Yendo en contra de los criterios de libre competencia y unidad de mercado, y la pacífica doctrina del TACRC, además de haber trabajado para una entidad pública concreta y para un plan específico.

Emerge entre otras infracciones la del artículo 145.5 y 6 de la LCSP que dispone:.

"5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo, y deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el apartado siguiente de este artículo.

b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.

c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.

6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:

Incluir esta cláusula, supone una vulneración del principio de libre concurrencia, vinculado al de igualdad y no discriminación (artículo 1º de la LCSP) puesto que, a través de estos, se garantiza que participen de los procedimientos de licitación el mayor número posible de licitadores en igualdad de condiciones.

Mediante el principio de igualdad de trato y no discriminación se exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente y que no se trate de manera idéntica situaciones diferentes. Se pretende favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una contratación pública. **Es exigible que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades** al formular los términos de sus ofertas y que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores.

En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo) que entre los principios esenciales que rigen la contratación administrativa, está la igualdad de acceso entre las distintas empresas dedicadas a la contratación pública y el procedimiento de contratación que tiende a garantizar el interés público mediante la articulación de tres principios cardinales de la licitación: el principio de publicidad, el principio de libre competencia y el principio de igualdad de oportunidades. Por consiguiente, el principio de igualdad y la prohibición de toda discriminación son principios fundamentales que deben respetarse en todo caso y a lo largo de todo el proceso de contratación.

La LCSP 2017 dedica el primero de sus preceptos a los principios generales de la contratación pública y así establece en su apartado 1 que la norma tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores

El Título I de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE se intitula "Ámbito de aplicación, definiciones y principios generales" y dedica su artículo 2 GIMENO FELIU, "Las nuevas Directivas –cuarta generación en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública", REDA núm. 159 (2013), págs. 25 y ss. Gabilex Nº Extraordinario Marzo 2019 <http://gabilex.castillalamancha.es> 23 18 a los "Principios de la contratación" para establecer *que "los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. La contratación no será concebida con el objetivo de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la competencia"*.

Principios reconocidos por el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea y, en particular la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios y de los principios derivados de la misma, tales como el de la igualdad de trato, no discriminación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la transparencia" y se hace alusión reiterada a los mismos a lo largo de toda la exposición de motivos de la Directiva 2014/24 (considerandos 12, 31, 40, 58, 68, 101, 114 y 136) 5. Así lo exigen distintos preceptos de los tratados de derecho originario, tal y como han sido interpretados por el propio Tribunal (STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C 458/03, Parking Brixen GMBH)⁷. El TJUE ha reiterado que el principio de igualdad de trato de los licitadores, que constituye la base de las directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, y el objetivo de favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas e implica pues que éstas se sometan a las mismas condiciones para todos.

Y así ha sido valorado en la reciente resolución del **Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP)** en resolución de fecha 9 de marzo de 2023 (**resolución 106/2023**) que estima el recurso especial interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid contra el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato.

La impugnación del COAM sostenía la nulidad de dicha cláusula por entender que además de desproporcionada y discriminatoria, restringía de forma absoluta la participación y era contraria a los principios esenciales en la contratación pública de libre acceso a las licitaciones y competencia (para una cláusula de arraigo territorial).

El Tribunal anula la cláusula, señalando que restringe de manera injustificada la experiencia, es desproporcionada y vulnera la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Son de destacar las siguientes consideraciones de la resolución: "*En efecto, **una cláusula de arraigo territorial no se limita exclusivamente a la ubicación de la sede de la empresa ni a la localización del equipo redactor, sino que abarca también las condiciones relevantes de la contratación, como ocurre en los criterios de solvencia impugnados en este caso, al restringir de manera injustificada la experiencia del personal a ejecutar el contrato al ámbito de la Comunidad de Madrid. Así la experiencia profesional de los miembros del equipo redactor en el planeamiento de una determinada comunidad autónoma se convierte en criterio de solvencia que puede determinar la admisión a la licitación, lo que se considera contrario a los principios de libertad de acceso, concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en los artículos 1 y 132.1 de la LCSP, y - 2 - absolutamente injustificado, vulnerando lo dispuesto en el artículo 116.4.c) de la LCSP. (...) Por otro lado, al restringir la experiencia en redacción de planeamiento general al***

ámbito de la Comunidad de Madrid, en municipios con una población de derecho igual o superior a 100.000 habitantes, las exigencias de acreditar un mínimo de dos contratos de redacción de planeamiento general en ese ámbito, cuando únicamente existe 10 municipios con esas características, se debe considerar desproporcionada. Como prevé el artículo 64.1 de la LCSP los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas para luchar contra el favoritismo y evitar cualquier distorsión de la competencia, garantizando la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores”.

En nuestro caso, aun no tratándose de una cláusula territorial, pero sí una exigencia que va más allá de lo que podemos considerar un criterio de igualdad además de ser discriminatorio, pues con los conocimientos en una determinada materia constructiva, no puede valorarse más a quien ha trabajado para una determinada administración territorial, utilizando unos fondos, como si la procedencia de los fondos del plan Edificant le diese mayor calidad al trabajo, o los proyectos de la Conselleria fuesen de superior calidad a los de otras administraciones como pueden ser los Ayuntamientos.

Como prevé el artículo 64.1 de la LCSP los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas para luchar contra el favoritismo y evitar cualquier distorsión de la competencia, garantizando la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores, en este concurso se favorece como ya hemos explicado a unos pocos.

Además, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en su artículo 9 dispone, al regular la garantía de las libertades de los operadores económicos, que “1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”, aludiendo en particular en su apartado 2.c) a la documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los contratos públicos.

Como ha mantenido el TACRC, en numerosas resoluciones, los pliegos han de proporcionar a los empresarios que participen en el procedimiento de contratación, acceso en condiciones de igualdad sin crear obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia, con respeto a los principios generales de la contratación de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y ajustando su actuación al principio de proporcionalidad, siendo este último determinante para evitar que la exigencia de una solvencia desproporcionada impida la efectividad de los principio de igualdad de trato y no discriminación, limitando la competencia efectiva.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO, tenga por presentado este recurso, contra los pliegos de condiciones particulares del concurso, en concreto los criterios de valoración, y acuerde declarar:

1. La nulidad del criterio de adjudicación de valorar con más puntos los PROYECTOS O DIRECCIONES FACULTATIVAS REALIZADAS CON EL PLAN EDIFICANT DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
2. Y tener en cuenta los criterios de solvencia técnica a las empresas de nueva creación.

En Valencia a 29 de diciembre de 2023

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MARINES